

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA DE LA RESPUESTA A RECURSO DE REVISIÓN RRA-13307/20.

Habiendo revisado la petición y el planteamiento presentado por el promovente en el Recurso de Revisión RRA-13307/20, **se ratifica la respuesta originalmente otorgada para la solicitud de información 0917500005320**, al tiempo que se señala que el planteamiento del peticionario no corresponde con la fundamentación y motivación establecida en la respuesta otorgada, por lo que atentamente se pone a consideración el presente informe de justificación:

Planteamiento:

En atención a la respuesta dada por la Administración Portuaria, cabe señalar que la información solicitada se encuentra en apego a los artículos 6 fracción I, V, VII y artículo 28 fracción VI emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual cabe señalar que la solicitud de información no corresponde a los supuestos mencionados en el artículo 113 fracción II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública; y Trigésimo octavo fracción III y Cuadragésimo cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, lo anterior sustentado en que los documentos solicitados se encuentran fundamentados en el artículo 148 de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual estipula que la vigencia máxima del documento es de 1 año, por lo cual los documentos no son válidos para mantener una negociación, pues su vigencia ha expirado, y en contraste correspondería a lo mencionado en el último párrafo del Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, al cual cito: "Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados".

Justificación:

Se hace del conocimiento que la información antes mencionada, no se encuentra clasificada como reservada, sino que es información clasificada como **confidencial**, de conformidad con lo previsto en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 117, 118 y 119 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 40 y 41 del Reglamento de la LFTAIP Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.

Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, para

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA DE LA RESPUESTA A RECURSO DE REVISIÓN RRA-13307/20.

efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema Nacional.

Artículo 119. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma.

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Artículo 40. Para que las dependencias o entidades puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares de la información, por escrito o medio de autenticación equivalente.

Artículo 41. Cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el Comité lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación correspondiente. El silencio del particular será considerado como una negativa.

Planteamiento:

Es importante resaltar que la documentación solicitada no corresponde a información que afecte la integridad patrimonial del puerto o cesionarios o implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional como refiere en el artículo 2 fracción XXXII de la Ley General de Protección Civil y 51 de la Ley de Seguridad Nacional; sobre el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual, cabe señalar que la información solicitada corresponde a la citada en el párrafo tercero de dicho artículo, pues los cesionarios en su mayoría corresponden a empresas públicas o filiales de estas; o en su defecto los datos sobre ingresos pueden ser cruzados con los movimientos realizados y reportados en el portal de Puertos y las tarifas reportadas, por lo que no corresponden a secretos industriales comerciales. Sobre el supuesto sustento basado en la Ley Federal de Competencia Económica, cabe señalar que el acceso a la información es uno de los mecanismos afines a evitar el monopolio y las prácticas desleales, por lo que no se sustenta la referencia de dicha jurisprudencia a fin de negar la información.

Justificación:

La actividad valuatoria realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), es originada por una solicitud de servicio valuatorio que realizan las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, en términos de lo dispuesto por el "PROCEDIMIENTO administrativo para que las instituciones públicas soliciten servicios valuatorios al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y para que éste expida y les remita los respectivos



ANEXO III

JUSTIFICACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA DE LA RESPUESTA A RECURSO DE REVISIÓN RRA-13307/20.

dictámenes valuatorios, utilizando un sistema electrónico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2012.

Dado que la solicitud de servicio valuatorio que realiza el promovente, nace de una relación contractual entre ese órgano valuador y la dependencia solicitante, el INDAABIN se compromete a emitir un dictamen valuatorio a cambio de una contraprestación que debe cubrir la solicitante del dictamen.

Por ello, acorde a lo dispuesto el punto 6. del *"PROCEDIMIENTO administrativo que regula la emisión de avalúos y justipreciaciones de rentas a que se refieren los artículos 143 y 144 de la Ley General de Bienes Nacionales"*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2008, la dependencia federal o entidad debe proporcionar la documentación requerida o procedente, dependiendo del uso que se le vaya a dar al dictamen, esto es, las solicitudes de servicio deben acompañarse de la documentación requerida señalada en la metodología y criterios técnicos aplicable al uso del dictamen de que se trate.

En el caso que nos ocupa, cuando esta Administración Portuaria Integral (APITUXPAN) solicita un servicio valuatorio al INDAABIN, lo hace cumpliendo la normatividad que rige a este órgano valuador; siendo obligatorio proporcionar la información y documentación que la metodología o procedimiento requiere para el proceso valuatorio.

Para la elaboración de los Dictámenes Valuatorios, se solicita información referente a: planes de negocios, estados financieros, inversiones realizadas y futuras, procesos productivos, entre otros; por lo que, de no poderse garantizar la confidencialidad de la información, se dejaría a la APITUXPAN y a las empresas privadas con las que tiene un Contrato de Cesión Parcial de Derechos (Cesionario), en riesgo de que los secretos comerciales queden expuestos.

De conformidad con la *"METODOLOGÍA de los servicios valuatorios regulados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para estimar el valor comercial de los activos: bienes inmuebles (urbanos, en transición y agropecuarios), bienes muebles (maquinaria y equipo o propiedad personal) y negocios"*, publicada en el DOF el 6 de junio de 2017, para la elaboración de los servicios valuatorios se solicita la información que a continuación se enlista:

a) Descripción general, objetivos, operaciones y situación actual del negocio.

b) Plan de negocios.

c) Estados financieros dictaminados de los últimos cinco años.

d) Otra documentación jurídica relevante del negocio:

■ **Información documental sobre la situación operativa y de costos de producción.**

■ **Información documental sobre la situación comercial y de mercado.**

■ **Inventario de maquinaria, mobiliario y equipo a contemplar.**

■ Copias de facturas y documentación de adquisición, en su caso.

■ **Derecho de patente sobre marcas y otros activos intangibles.**

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA DE LA RESPUESTA A RECURSO DE REVISIÓN RRA-13307/20.

e) **Proyección financiera según el alcance del servicio.**

f) **Cartera de clientes y contratos vigentes.**

g) Pasivos laborales.

h) **Capacidad instalada y de producción.**

También como los documentos e información que considere necesarios el valuador de bienes nacionales, según sea el caso."

Es así que la información que proporcionan las API's para la elaboración de un dictamen valuatorio, en gran parte proviene de los cesionarios, con los cuales se tienen contratos firmados que obliga a estos a proporcionarla, por lo cual, de ser divulgada, no solo se vería en riesgo la posición competitiva de la APITUXPAN sino del Cesionario, dado que **para la elaboración de los Dictámenes Valuorios se entrega información referente a: Planes de negocios, Estados Financieros, inversiones realizadas en equipamiento e infraestructura, sistemas de tecnologías de información, procesos productivos, así como el programa de inversión de infraestructura y equipamiento previsto en el Reglamento de la Ley de Puertos, entre otros.**

Es importante reiterar que el INDAABIN, a través de sus normas, prevé los medios necesarios para preservar la confidencialidad de la información, puesto que en la Cláusula Trigésima Cuarta, fracción III. Confidencialidad, se ordena que El Valuador de Bienes Nacionales deberá proteger la confidencialidad de la información proporcionada por el Promovente del servicio. Supuesto que esta API de Tuxpan consideró para que la información fuera clasificada como confidencial, y se tomaron medidas para resguardarla.

Entonces, el INDAABIN queda como depositario de esa información y documentación, en tanto realiza la actividad valuatoria, la cual, concluye al momento de que se emite formalmente el dictamen valuatorio y es entregado al contratante de dicho servicio.

En términos del "ACUERDO por el que se establecen las Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los servicios valuatorios regulados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2016, específicamente en la Cláusula Trigésima Cuarta, fracción III. Confidencialidad, se ordena que El Valuador de Bienes Nacionales deberá proteger la confidencialidad de la información proporcionada por el Promovente del servicio:

"III. Confidencialidad:

El Valuador de Bienes Nacionales deberá proteger la confidencialidad de la información que resulte de la relación Perito Valuador, Revisor, Personal Técnico y promovente.

El Valuador de Bienes Nacionales deberá actuar en todo momento, de buena fe, con respecto a los intereses legítimos del promovente en el uso de información confidencial y en la comunicación de los resultados de la asignación.

El Valuador de Bienes Nacionales deberá cumplir con todas las leyes y normas de confidencialidad y privacidad aplicable en una asignación.

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA DE LA RESPUESTA A RECURSO DE REVISIÓN RRA-13307/20.

El Valuador de Bienes Nacionales se abstendrá de proporcionar información confidencial, o los resultados del servicio valuatorio a persona alguna, con excepción de:

- El promovente;
- Personas específicamente autorizadas por el promovente;
- Organismos regulatorios;
- Terceras partes que pueden ser autorizadas por el debido proceso legal;
- o
- Partes profesionales de un comité de revisión debidamente autorizados, excepto cuando tal revelación para un comité pueda violar la ley o regulación aplicable.

Los miembros de algún comité de revisión debidamente autorizados, no deberán revelar información confidencial presentada a dicho comité."

De lo anterior se desprende que la información proporcionada por los promoventes al Instituto, tiene el carácter de confidencial, con la finalidad de dar certidumbre a quien la entrega.

Planteamiento:

Por lo antes expuesto solicito se verifique la información proporcionada por el sujeto obligado, pues ha negado el acceso a la información en contravención a lo estipulado en las Leyes vigentes, lo anterior al testar información tales como el Domicilio del activo valuado el cual corresponde a información pública al encontrarse dentro del recinto portuario, superficies cesionadas y montos conclusivos, así como los cálculos por el cual se determina dicho valor conclusivo, aún más cuando dichos cálculos no corresponden a propiedad intelectual privada y forman parte de normatividades del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Cabe señalar que en otras solicitudes de información a Administraciones portuarias como la 0917900010820 se proporcionó esta información sin testar únicamente testando los avalúos que continúan en vigencia, por lo que no tendría congruencia negación al acceso a esta información.

Justificación:

En este sentido se informó al solicitante que respecto de la información concerniente al secuencial 04-17-1569, se adjuntó como Anexo 1, la versión pública del mismo, ya que este dictamen es a la Administración Portuaria Integral de Tuxpan.

En este caso en particular, el Dictamen Valuatorio se clasificó como información confidencial dado que proporciona detalle del patrimonio de la APITUXPAN, al contener el valor neto de reposición de las construcciones de su propiedad, y que resulta de la información generada con motivo de las actividades comerciales de la API, considerando que los valores del área concesionada reflejan la potencialidad del Puerto, de conformidad con la Ley de Puertos.

De darse a conocer valores de referencia de áreas dentro del Recinto Portuario, se estaría poniendo en riesgo el poder de negociación de la API, en concursos

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA DE LA RESPUESTA A RECURSO DE REVISIÓN RRA-13307/20.

futuros de las áreas de reserva con que cuenta, dado que se podrían estar sesgando las propuestas de los concursantes.

Publicar valores de referencia de las áreas para el cálculo de las contraprestaciones y/o los valores de contraprestaciones mismas, podría sesgar las propuestas que realicen los participantes en los concursos o en las negociaciones de las adjudicaciones directas, en detrimento de los ingresos de la API.

De entregarse la información se estaría distorsionando el proceso de libre competencia en los concursos de cesión parcial de derechos y concesiones, dañando la posición competitiva de la API, dado que se estarían sesgando los concursos proporcionando valores de referencia para las áreas que solamente conoce la APITUXPAN y la empresa cesionaria titular del contrato de Cesión parcial de derechos correspondiente.

Respecto de la información concerniente a los secuenciales: 04-13-505, 04-13-506, 04-13-507, 04-13-508, 04-13-567, 04-13-552, 04-13-509, 04-13-510, 04-13-511, 04-13-512, 04-13-513, 04-16-487, 04-16-738, 04-17-1569, 04-18-335, 04-18-334, 04-18-348, 04-18-341, 04-18-350, 04-18-333, 04-18-332, 04-18-331, 04-18-664, 04-18-1050, 04-18-1049, 04-18-1048 y 04-19-71, **se hizo del conocimiento del solicitante que dichos servicios fueron pagados por un particular (Cesionario).**

En este sentido, tanto la información proporcionada por las empresas cesionarias a la API y el INDAABIN, como los Dictámenes Valuatorios, Memorias de Cálculo y Anexos derivados de ella, cumplen con los supuestos para constituirse como Secreto Industrial, por lo que debe considerarse como confidencial, por tratarse de información derivada del manejo de su negocio y le permite mantener sus ventajas competitivas, por lo que de darse a conocer podría ser utilizada para que un competidor la socave.

Ahora bien, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), el artículo 3º señala que toda la información es pública y, en casos excepcionales puede ser clasificada.

“Artículo 3. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan.

El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.”

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA DE LA RESPUESTA A RECURSO DE REVISIÓN RRA-13307/20.

Dicha Ley, en el art. 113 indica que información se considera como confidencial:

Artículo 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

II. **Los secretos** bancario, fiduciario, industrial, **comercial**, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y

III. **Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello**, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Como se puede observar, hay cierta consonancia entre la LFTAIP y las Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), puesto que la primera señala que el secreto comercial es confidencial y la segunda indica en su artículo 3, **que es confidencial aquella que de divulgarse, pueda causar un perjuicio en la posición competitiva de quien la haya proporcionado, aquella que contenga datos personales cuya difusión requiera su consentimiento y aquella que pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación.**

Adicionalmente, en los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, publicados en el DOF el 15 de abril de 2016, respecto a la clasificación de la información como confidencial se indica lo siguiente:

“Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

Cuadragésimo primero. Será confidencial la información que los particulares proporcionen a los sujetos obligados para fines estadísticos; que éstos obtengan de registros administrativos o aquellos que contengan información relativa al estado civil de las personas, no podrán difundirse en forma nominativa o individualizada, o de cualquier otra

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA DE LA RESPUESTA A RECURSO DE REVISIÓN RRA-13307/20.

forma que permita la identificación inmediata de los involucrados, o conduzcan, por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación individual de los mismos, en los términos que determine la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes:

- I. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
- II. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para preservarla;
- III. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, y
- IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial."

Al respecto, entregar la información de dictámenes valuatorios, tiene dos vertientes por las que la información se debe considerar como confidencial: la primera, porque se proporcionaría información relativa a secretos industriales de los cesionarios, y la segunda, porque se afectaría la posición competitiva de APITUXPAN.

En primera instancia, retomando los lineamientos para la clasificación de la información, se tiene que para clasificar la información por secreto comercial o industrial, se debe acreditar que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. Al respecto, la *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, publicada en el DOF el 1 de julio del año en curso, se define como Secreto Industrial:

Artículo 163.- Para efectos de este Título, se entenderá por:

I.- Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA DE LA RESPUESTA A RECURSO DE REVISIÓN RRA-13307/20.

para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad, y

II.- Apropiación indebida, a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres.

En esta sentido, de acuerdo al artículo 120 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 40 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se puede proporcionar información de particulares de quienes no se cuenta con autorización expresa para entregar dichos documentos. No se omite mencionar que a cada uno de los particulares involucrados, se les solicitó autorización por escrito, por ser los titulares de la información, obteniendo una negativa del mismo.

Los dictámenes valuatorios están vinculados con la contraprestación, misma que de conformidad con la Ley de Puertos, debe contemplar la potencialidad del puerto y del área cedida; por lo que de darse a conocer la información inherente a los dictámenes valuatorios, memoria de cálculo y la base informativa proporcionada para su elaboración, se estaría revelando información relativa al potencial de la operación del Puerto y de la empresa Cesionaria, poniendo en riesgo su posición competitiva ante terceros y, en particular, ante competidores.

Ahora bien, la Ley Federal de Competencia Económica dispone lo siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre competencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre competencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre competencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA DE LA RESPUESTA A RECURSO DE REVISIÓN RRA-13307/20.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

Agente Económico: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica;

...
Barreras a la Competencia y la Libre Concurrencia: Cualquier característica estructural del mercado, hecho o acto de los Agentes Económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados; que impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia;

...
Información Confidencial: Aquélla que de divulgarse pueda causar un daño o perjuicio en la posición competitiva de quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación;

Información Pública: Aquélla que se haya dado a conocer por cualquier medio de difusión público, se halle en registros o en fuentes de acceso públicos;

XI. Información Reservada: Aquélla a la que sólo los Agentes Económicos con interés jurídico en el procedimiento pueden tener acceso;

Artículo 4. Están sujetos a lo dispuesto por esta Ley todos los Agentes Económicos. Serán responsables solidarios los Agentes Económicos que hayan tomado o adoptado la decisión, así como instruido o ejercido influencia decisiva en la toma de decisión, y el directamente involucrado en la realización de la conducta prohibida por esta Ley.

En razón de lo anterior, esta API de Tuxpan está impedida jurídicamente para entregar la información depositada en sus archivos, como promovente por parte de los Cesionarios de los servicios valuatorios, toda vez que se trata de Información Confidencial, que de divulgarse podría causar un daño o perjuicio en la posición competitiva de los mismos Cesionarios que son dueños de la información valuatoria.

Nuevamente, resulta evidente que los dictámenes valuatorios, la memoria de cálculo y sus anexos, son información de carácter confidencial que, en caso de darse a conocer, causarían un daño en la posición competitiva de la API frente a terceros en los concursos, limitando las posibilidades de obtener las mejores condiciones en el proceso.